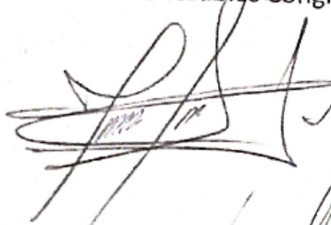


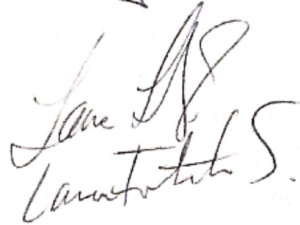
PROPOSICIÓN

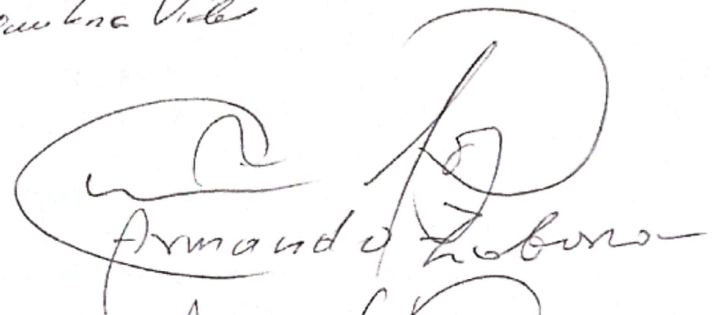
Adiciónese un artículo nuevo al proyecto de ley No. 057 de 2023 Cámara y 079 de 2023 Senado "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2024", el cual quedará así:

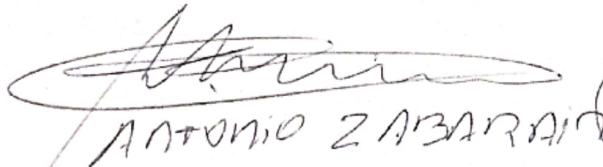
ARTÍCULO NUEVO: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con cargo a los rendimientos financieros generados por el Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), desarrollará un depósito de información de las cotizaciones a pensiones de los funcionarios activos, inactivos y pensionados de las entidades territoriales, tanto de régimen general como de regímenes especiales. La ejecución de este proyecto deberá realizarse en la vigencia 2024.

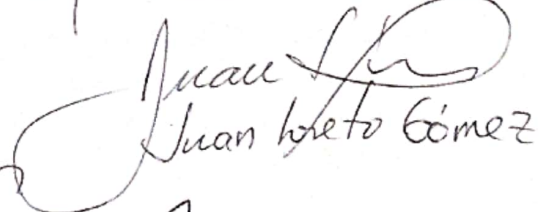
De los Honorables Congresistas,

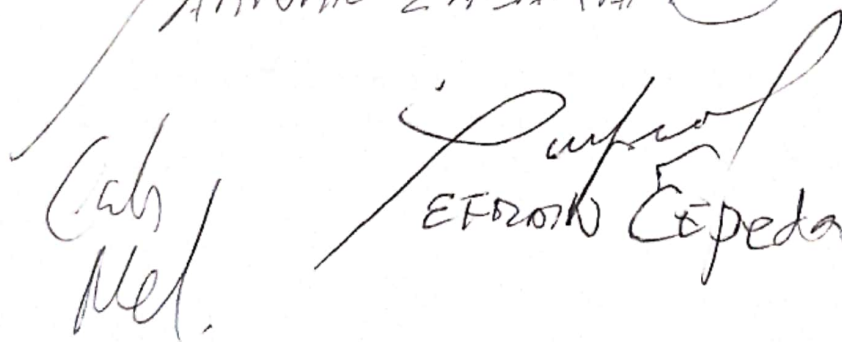
 Modesto E. Sanabria

 Juan Carlos Llanusa

 Armando Zubizarreta

 ANTONIO ZABARRAIN

 Juan Nieto Gómez

 Efraim Cepeda

 Calixto Meléndez

Recibí
Com. IV Cámara
Sept 26/2023
11:45am
Diana S. Priante



Justificación

Las entidades territoriales tienen la obligación de reconocer y pagar el pasivo pensional a cargo de los trabajadores, ex trabajadores o pensionados, como pagadores directos de la pensión o como cuotapartistas de la misma. Para el cumplimiento de este cometido las entidades territoriales deben realizar las respectivas reservas de dinero para solventar la obligación que adquieren con sus empleados.

En aras de cumplir con esta obligación, las entidades territoriales del país tienen la necesidad de adelantar la normalización de los pasivos pensionales mediante la organización, depuración y análisis de la información contenida en sus expedientes de historias laborales del personal activo, retirado y pensionado.

Esta necesidad de organizar y depurar la información que tienen bajo su custodia las entidades territoriales se origina con el cambio de normatividad del sistema pensional en el año 1993, ya que anterior a este año, se reconocían y pagaban las pensiones de los servidores públicos directamente o a través de cajas de previsión social con información laboral insuficiente, que dificultaba la determinación real de la obligación pensional y el respaldo de los pagos por concepto de estas obligaciones, esta situación motivó a que el Gobierno Nacional abordara el tema pensional en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La ley 100 de 1993 consolidó el nuevo régimen pensional del país, el cual, dentro de su articulado ordenó entre otras, incorporar a los empleados al nuevo Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, ya fuera al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida o al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. La ley también dispuso que las entidades territoriales debían estimar el tamaño de su pasivo pensional generado por sus trabajadores activos, pensionados y retirados, con el objeto de provisionar las reservas pensionales. Adicionalmente, la Ley autorizó la creación de los Fondos Territoriales de Pensiones, otorgándoles la facultad de conservar un archivo ordenado y sistematizado con las historias laborales, administrar los recursos de reservas pensionales, pagar la nómina de los pensionados, y calcular y ordenar el pago de los bonos pensionales a su cargo.

En el año 1999 mediante la promulgación de la Ley 549 se creó el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), como un fondo sin personería jurídica administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para apoyar a las



MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

entidades territoriales en el proceso de definir, organizar y financiar el pago de las obligaciones pensionales territoriales.

A través del FONPET, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, brinda un apoyo a las entidades territoriales en materia pensional, y en la atención de las obligaciones pensionales de los sectores de propósito general, educación y salud, siempre bajo la premisa que la información entregada por las entidades territoriales procede de una fuente segura y que los datos son certificados, confiables y seguros. La herramienta PASIVOCOL (programa de seguimiento y actualización de los cálculos actuariales del pasivo pensional de las entidades territoriales) se utiliza como insumo para consolidar la información suministrada por cada entidad territorial y sus entidades descentralizadas, a través de la reconstrucción y registro de historias laborales de los empleados activos, pensionados, beneficiarios de pensión y retirados.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público para efectuar la estimación del pasivo pensional cuyo valor debe corresponder a la meta de aprovisionamiento registrado en el FONPET, se ha basado en el principio de buena fe de que la información suministrada y registrada en PASIVOCOL por las entidades territoriales es veraz, oportuna, confiable y de calidad. Contrario a ello, las frecuentes reclamaciones e inconsistencias reportadas por las mismas entidades territoriales respecto a la información que se encuentra en la herramienta, requiere por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la implementación de una misión institucional encaminada al mejoramiento en la calidad de la información con el objetivo de disminuir las inconsistencias e inconformidades que se presentan, y realizar un trabajo real de depuración, consolidación, y aceptación de la información que garantice la certificación de los datos desde su fuente de origen, es decir, desde la información contenida en los expedientes físicos de las historias laborales que reposan en cada entidad territorial.

El Ministerio para el cumplimiento de esta misión y con el fin de mejorar sus procesos, requiere la conformación de un depósito de información que integre y automatice los diferentes procesos, este depósito de información busca asegurar la calidad de la información y la confiabilidad de los datos suministrados con el fin de generar información real en el tema pensional, valiéndose de herramientas tecnológicas que permitan avanzar en el proceso de desmaterialización y racionalización de los trámites acorde a las últimas disposiciones legales, brindando mayor confiabilidad de la información generada, permitiendo la gobernabilidad de la mismas, optimizando los



tiempos de respuesta para la toma de decisiones y evitando repercusiones económicas dentro del proceso pensional.